

MEDELLÍN, JUEVES 31 DE ENERO DE 2013

Gaceta Departamental

Registrando la historia de Antioquia desde 1908

EDICIÓN DE 62 PÁGINAS



Registrado en el Ministerio de Gobierno por Resol. No. 000474 de junio de 1967 - Tarifa postal reducida No. 2333 de la Admón Postal Nal. - Porte Pagado

No.19.434

COMERCIALES

SUMARIO RESOLUCIONES DICIEMBRE 2012

NUMERO	FECHA	PAGINA	NUMERO	FECHA	PAGINA
067826	Diciembre 11 de 2012	2	067836	Diciembre 11 de 2012	33
067827	Diciembre 11 de 2012	4	067837	Diciembre 11 de 2012	36
067828	Diciembre 11 de 2012	6	067839	Diciembre 11 de 2012	40
067829	Diciembre 11 de 2012	10	067840	Diciembre 11 de 2012	43
067830	Diciembre 11 de 2012	13	067841	Diciembre 11 de 2012	47
067832	Diciembre 11 de 2012	18	067842	Diciembre 11 de 2012	51
067833	Diciembre 11 de 2012	22	067843	Diciembre 11 de 2012	55
067834	Diciembre 11 de 2012	25	067849	Diciembre 11 de 2012	58
067835	Diciembre 11 de 2012	30			



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA GENERAL
Imprenta Departamental de Antioquia
Dr. Sergio Arroyave Maya
Director



ORDEN AL MÉRITO
CÍVICO Y EMPRESARIAL
MARISCAL JORGE ROBLEDO
CATEGORÍA ORO



RESOLUCIÓN No. 67826
11 DIC 2012

Por medio de la cual se decide sobre unos recursos

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 25 de julio de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Granero La Entrada** ubicado en la Carrera 51 No. 45 - 04 del municipio de El Santuario, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Evelio de Jesús Ramírez Ramírez** identificado con cédula de ciudadanía No. 70.690.414.

Que mediante Auto No. 667 del 12 de abril de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1294 del 29 de mayo de 2012 se formuló cargos al señor **Evelio de Jesús Ramírez Ramírez**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Granero La Entrada**, por infringir los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979; Artículo 34 del Decreto 3075 de 1997 y la definición de "**FECHA LIMITE DE UTILIZACION**" contenida en el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005.

Que analizado el merito del sumario y los argumentos planteados en el escrito de los descargos, mediante Resolución No. 57197 de 13 de agosto de 2012 se sancionó al señor **Evelio de Jesús Ramírez Ramírez**, con Multa equivalente a cinco (5) SMDLV.

Que debidamente notificada la decisión, el señor **Evelio de Jesús Ramírez Ramírez**, presentó escrito de inconformidad a la Resolución No. 57197 de 13 de agosto de 2012, si bien no manifiesta expresamente la interposición del recurso de reposición, éste Despacho considera que cumple con los requisitos contemplados en el numeral 1 del artículo 52 del Código Contencioso Administrativo¹, el cual reza: "*Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente*". Por lo que en aras de garantizar el principio del debido proceso, la petición contenida en dicho escrito, para resuelta como recurso de reposición, pero es de advertir que no se concediera el recurso de apelación, por cuanto éste último, debe ser rogado expresamente según lo contemplado en el inciso tercero del artículo 51 ibidem.

Para resolver se considera lo siguiente,

Manifiesta su inconformidad el implicado en su escrito, argumentando que los productos que fueron encontrados y posteriormente decomisados los tenía separados para hacer su respectivo cambio con el proveedor, ya que ellos solicitan el producto como prueba para su canje; igualmente manifiesta que sin hacer caso omiso a la norma, se acoge a ellos, pero no está en condiciones de pagar la sanción, pues su negocio es pequeño y muy golpeado por los grandes supermercados.

Frente lo anterior, es importante aclararle al implicado que la presente investigación se adelantó respetando el principio constitucional del debido proceso, de acuerdo a los lineamientos de la Ley 9 de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, respetando desde sus inicios el derecho a la defensa; es así como desde la notificación de los cargos a los implicados, expresamente se le advirtió de acuerdo al artículo 99 del Decreto 3075 de 1997, que gozaba de un término de diez (10) días hábiles para presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que sean conducentes para su defensa y que además tenía derecho a hacerse asistir de un abogado.

Como se dijo en la resolución recurrida, tener productos que incumplan con las normas de Calidad se encuentra debidamente tipificado como infracción en la normatividad sanitaria vigente y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción. El hecho de que los productos se encontraran separados, como él mismo lo afirmó en sus descargos, no lo exime de la responsabilidad administrativa que ello acarrea.

En cuanto a la sanción monetaria, este Despacho indica que la misma resulta equitativa en relación con los significativos hallazgos y con el límite traído por el artículo 111 del Decreto 3075 de 1997, el cual indica que puede aplicarse multas hasta por una suma equivalente a diez mil (10.000) salarios mínimos legales diarios vigentes.

Así mismo se le informa que la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia expidió la Resolución No. 08468 del día 12 de mayo de 2008, contemplando en su artículo 4, la posibilidad de realizar pagos parciales por parte del deudor a las obligaciones derivadas de la imposición de una sanción pecuniaria por el incumplimiento a la normatividad sanitaria, para lo cual una vez quedé ejecutoriada la resolución sancionatoria, podrá presentar su solicitud a la Dirección Asuntos Legales a fin de se le elabore el acuerdo de pago.

¹ Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

No existen fundamentos entonces, ni de hecho ni de derecho, para modificar en modo alguno las determinaciones adoptadas mediante la resolución recurrida, por lo que no habrá de reponerse.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 57197 del día 13 de agosto de 2012 por medio de la cual se impone una sanción al señor **Evelio de Jesús Ramírez Ramírez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70690414, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Granero La Entrada** ubicado en la Carrera 51 No. 45 - 04 del municipio de El Santuario, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, por las consideraciones realizadas en la parte motiva de ésta providencia.



ARTÍCULO SEGUNDO Notificar la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los
11 DIC 2012

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo de Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN No. 67827

11 DIC 2012

Por medio de la cual se decide sobre unos recursos

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 19 de octubre de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Restaurante Carnes y Carnes en Antioquia** ubicado en la Carrera 10 No. 9 - 45 del municipio de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Fredy Jesús Porras León** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.077.649 y su **Administradora** la señora **María Esperanza Higuita Florez** identificada con cédula de ciudadanía No. 21.691.437.

Que mediante Auto No. 787 del 2 de mayo de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1198 del 24 de mayo de 2012 se formuló cargos al señor **Fredy Jesús Porras León** y a la señora **María Esperanza Higuita Florez**, en sus calidades de **Propietario y Administradora**, respectivamente, del establecimiento denominado **Restaurante Carnes y Carnes en Antioquia**, por infringir los artículos 195, 254, 259 y 264 de la Ley 9ª de 1979 y artículo 8 literales d y m y artículo 9 literales d y f del Decreto 3075 de 1997.

Que analizado el mérito del sumario, mediante Resolución No. 56211 del 30 de julio de 2012 se sancionó al señor **Fredy Jesús Porras León** y a la señora **María Esperanza Higuita Florez** con Multas equivalentes a veinte (20) y diez (10) SMDLV respectivamente.

Que debidamente notificada la decisión, el señor **Fredy Jesús Porras León** y la señora **María Esperanza Higuita Florez** interpusieron contra ésta, recurso de Reposición dentro del término de ley.

Para resolver se considera lo siguiente,

Que en el escrito del recurso, manifiesta el señor **Fredy Jesús Porras León** que actúa en nombre propio y representación de la señora **María Esperanza Higuita Florez**, pero revisado el expediente no se observa poder debidamente conferido en los términos del artículo 65 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por lo que no se la reconocerá personería jurídica para actuar en el presente proceso a nombre de la implicada, no obstante éste Despacho observa que el escrito del recurso fue firmado por la mencionada señora, por lo que los argumentos allí contenidos serán tenidos como presentados por ella misma.

Entrándonos en el asunto que nos compete, manifiestan los sancionados en el escrito de sus recursos que reconocen el hecho de que los descargos no fueron presentados de manera oportuna como lo contempla el artículo 99 del Decreto 3075 de 1997, por lo que solicitan se tengan en cuenta como pruebas documentales las contenidas en el escrito No. 201200157298 presentado el 20 de junio de 2012, las cuales reposan en el expediente, para que se comparen las mejoras realizadas al establecimiento y por lo tanto se les exonere de responsabilidad total o en parte de los cargos a ellos formulados.

Según lo anterior, reposa en el expediente fotografías donde se evidencia que la puerta cuenta con barrera de protección contra roedores, se adquirió tanque para el almacenamiento de agua y que la pared se encuentra debidamente pintada, pero no ha garantizado que el techo sea en material sanitario.

Así mismo, aportó como prueba varias facturas de compra a proveedores donde se observa que el establecimiento adquiere productos para la limpieza y desinfección, si bien se cuenta con estos implementos en el establecimiento no se evidencia que se realiza lavado y desinfección general como lo contempla la normatividad sanitaria vigente, por lo tanto no puede evidenciar éste Despacho que se ha cumplido con este requerimiento.

Frente a la solicitud que hacen los implicados de que sean exonerados de responsabilidad, es pertinente aclararles que las conductas por las cuales se le imputo cargos, se encuentran debidamente tipificadas como infracciones en la normatividad sanitaria vigente y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción como efectivamente ocurrió en el *sub iudice*, por lo que el cumplimiento de los requerimientos no los exime de la responsabilidad administrativa que ello acarrea.

En virtud del cumplimiento de algunos de los requerimientos dejados en la visita del 19 de octubre de 2011, no puede entrar éste Despacho a desconocer el mejoramiento que han tenido los implicados en el establecimiento denominado **Restaurante Carnes y Carnes en Antioquia**, se modificará a su justa medida la sanción impuesta en el presente proceso sancionatorio.



Atendiendo además, a la justa proporcionalidad que debe guardar una sanción con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en la falta que se sanciona, constituyendo un principio que ha sido reiterado y declarado por la jurisprudencia, cuya aplicación al derecho administrativo sancionador no supone en forma alguna sustitución de facultades administrativas, sino simplemente corrección del exceso legal que supone ejercitar la discrecionalidad más allá de lo que consisten los hechos determinantes del acto administrativo, que son los que delimitan el ámbito propio de los poderes discrecionales de la graduación de la sanción y señalan la diferencia entre el correcto ejercicio de éstos y la arbitrariedad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 56211 del 30 de julio de 2012, en el sentido de que las sanciones a imponer al señor **Fredy Jesús Porras León** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.077.649 y a la señora **María Esperanza Higueta Florez** identificada con cédula de ciudadanía No. 21.691.437, en sus calidades de **Propietario y Administradora** respectivamente, del establecimiento denominado **Restaurante Carnes y Carnes en Antioquia** ubicado en la Carrera 10 No. 9 - 45 del municipio de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, será de **MULTA** equivalente a **DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** y **AMONESTACIÓN**, respectivamente, por las consideraciones realizadas en la parte motiva de ésta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo de Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N°

67828

11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997,



artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 5 de mayo de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Carnicería Los Profes** ubicada en la Calle 20 No. 21 - 13 del municipio de Betania, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Edison Jorlay Marín Muñoz** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.264.728.

Que mediante Auto No. 685 del 13 de abril de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1586 del 29 de junio de 2012 se formuló cargos al señor **Edison Jorlay Marín Muñoz**, en su calidad de **Propietario** de la **Carnicería Los Profes**, por infringir los artículos 304, 305 y 345 Ley 9 de 1979; literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997; Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007 y numeral 29 del artículo 78 de la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.

Que mediante auto No. 3613 del 16 de octubre de 2009, se dejó sin efectos toda la actuación administrativa adelantada en contra de los implicados a partir del auto de cargos No. 1586 del 29 de junio de 2012, inclusive, ordenando en su artículo segundo rehacer nuevamente todo el proceso.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que mediante auto No. 2551 del 3 de octubre de 2012, se decretó como prueba debidamente aportada al proceso, el documento allegado por el implicado con el memorial de los descargos radicado No. 201200222841 del 21 de agosto de 2012.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Respecto al producto decomisado, hay que aclarar que es un producto considerado de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 31 del Decreto 3075 de 1997 por lo que requiere conocer la procedencia del producto destinado para la venta al público para proteger la salud de los consumidores, en tal sentido quien se dedica a la actividad de producción y/o expendio de alimentos debe cumplir con tales requisitos

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 5 de mayo de 2011 es una infracción al inciso final del artículo 345 de la Ley 9ª de 1979, al artículo 31 literal c del Decreto 3075 de 1997 y numeral 2 del artículo 39 del Decreto 1500 de 2007 por lo que al comprobar su violación, se procedió al decomiso de los productos que constituyen la

evidencia física de la conducta infractora, que por demás se encuentra tipificada en los artículos 305 de la Ley 9ª de 1979 y 84 del Decreto 3075 de 1997, cuando establecen que se prohíbe la tenencia y expendio de productos no aptos para el consumo humano y que se procederá al decomiso el producto que no cumpla con las normas sanitarias vigentes.

Frente lo anterior manifiesta el implicado en sus descargos que en el momento del decomiso se encontraba el señor José Arcángel Betancur, persona ajena a la administración del negocio, pero que vía telefónica se le informó a la funcionaria que realizó la visita la procedencia de la carne y para ratificar la legalidad del sacrificio de la carne, aporta como prueba factura No. 473 expedida por COGARGAN Corporación de Carniceros y Ganaderos de Jericó, Pueblorrico y Tarso, donde realizó el sacrificio de 10 cerdos.

Es de aclarar que la Corporación de Carniceros y Ganaderos de Jericó, Pueblorrico y Tarso - COGARGAN cuenta la correspondiente autorización del INVIMA para realizar sacrificio de animales para los 3 municipios que conforman la corporación, por lo tanto la guía no tiene validez para acreditar la procedencia de un animal que está siendo comercializado en el municipio de Betania.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor Edison Jorlay Marín Muñoz, en el establecimiento denominado **Carnicería Los Profos**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de productos cármicos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la **"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante el señor **Edison Jorlay Marín Muñoz** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad, ponen en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Edison Jorlay Marín Muñoz** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.264.728, en su calidad de **Propietario** de la **Carnicería Los Profes** ubicada en la Calle 20 No. 21 - 13 del municipio de Betania, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición y de Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 11 de DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN Nº 67829

11 DIC 2012

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 10 de mayo de 2012, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al **Expendio de Carnes Airolly** ubicado en el Carrera 98 Barrio El Bosque del municipio de Chigorodó, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Juan Camilo Lopera** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.407.197.

Que mediante Auto No. 1550 del 25 de junio de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1777 del 18 de julio de 2012 se formuló cargos al señor **Juan Camilo Lopera**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Expendio de Carnes Airolly**, por infringir los artículos 304, 305 y 345 Ley 9 de 1979; literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997; Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007 y numeral 29 del artículo 78 de la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 10 de mayo de 2012, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.



Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Respecto al producto decomisado, hay que aclarar que es un producto considerado de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 3° del Decreto 3075 de 1997 por lo que requiere conocer la procedencia del producto destinado para la venta al público para proteger la salud de los consumidores, en tal sentido quien se dedica a la actividad de producción y/o expendio de alimentos debe cumplir con tales requisitos.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos los que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor como los productos cárnicos a los cuales se les desconoce la procedencia, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Es por eso que la conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 10 de mayo de 2012 constituye infracción al inciso final del artículo 345 de la Ley 9ª de 1979, al artículo 31 literal c del Decreto 3075 de 1997 y numeral 2 del artículo 39 del Decreto 1500 de 2007.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 1500 de 2007 y Resolución 2905 de 2007, son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Juan Camilo Lopera**, en el establecimiento denominado **Expendio de Carnes Airoly**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que la carne cuente con su respectiva guía de procedencia.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la **"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expedieron entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general."**

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Juan Camilo Lopera** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad, sin importar la cantidad que sea, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Juan Camilo Lopera** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.407.197, en su calidad de **Propietario del Expendio de Carnes Airolly** ubicado en la Carrera 98 Barrio El Bosque del municipio de Chigorodó, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTICINCO (25) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá

ser cancelado a favor de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DÍAS 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67830

11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075

de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 1 de septiembre de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **La Colmena Carnicería y Legumbrería** ubicado en la Calle 20 No. 12 - 09 del municipio de Yarumal, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Felipe René Vásquez Henao** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.329.276.

Que mediante Auto No. 703 del 13 de abril de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1304 del 29 de mayo de 2012 se formuló cargos al señor **Felipe René Vásquez Henao**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **La Colmena Carnicería y Legumbrería**, por infringir el Literal d del artículo 84, artículos 176, 177, 188, 192, 198, 199, 207, 249 literales b y d, 254, 256, 257, 264, 292, 304 y 305 de la Ley 9 de 1979; artículo 8 literal k, artículo 9 literales a, d, f, artículo 13 literal a, artículo 14 literal a y artículo 34 del Decreto 3075 de 1997; Numeral 2 del artículo 36, numerales 1.1.1, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.9, 1.1.11.1, 1.1.13 del artículo 26, de conformidad al numeral 5 del artículo 36 y numeral 1 del artículo 42 del Decreto 1500 de 2007 y la definición de "**FECHA LIMITE DE UTILIZACION**" contenida en el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005 y artículo 77 numeral 3 y artículo 78 numerales 1, 4, 5, 11, 15, 19.1, 20.2 y 26 de la Resolución 2905 de 2007.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso.

Que analizado el merito del sumario, mediante Resolución No. 56210 del 30 de julio de 2012, se sancionó al señor **Felipe René Vásquez Henao**, con multa equivalente a cincuenta (50) SMDLV.

Que mediante Resolución No. 60778 del 14 de septiembre de 2012 se dejó sin efectos la Resolución No. 56210 del 30 de julio de 2012 y se ordenó rehacer la actuación administrativa valorando los descargos presentados por el implicado en aras de garantizar el debido proceso.

Que mediante auto No. 2430 del 27 de septiembre de 2012 se decretó como pruebas debidamente aportadas al proceso, los documentos allegados con el memorial de los descargos radicado No. 201200163105 del 25 de junio de 2012.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Como se anotó anteriormente, en visita realizada el día 1 de septiembre de 2011 al establecimiento denominado **La Colmena Carnicería y Legumbrería**, y de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 69 y 70 del Decreto 3075 de 1997, por el incumplimiento a los requisitos higiénico locativos en el establecimiento, se aplicó la suspensión del servicio de expendio de carnes, para prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación que pudiera atentar contra la salud de la comunidad, medida que fue levantada por el cumplimiento a la mayoría de los requerimientos dejados en la visita.

Frente lo anterior, manifiesta el implicado en sus descargos que las anomalías evidenciadas en su establecimiento fueron corregidas y se cumplió a cabalidad con todos los requerimientos dejados por los técnicos área de la salud en las visitas, prueba de ello es que la medida fue levantada el día 4 de Noviembre de 2011, como se afirmó en el auto de cargos.

Así mismo, aporta como pruebas que pretende hacer valer a su favor las siguientes:

- Copia de Examen médico realizado en la IPS Somos Salud SAS el día 9 de Septiembre de 2011, visible a folio 19 del expediente.
- Copia del certificado de asistencia al curso taller "Manejo de alimentos y bebidas alcohólicas en el Departamento de Antioquia", visible a folio 20 del expediente.
- Fotografías de las diferentes áreas del establecimiento, visibles a folios 21 al 24 del expediente.
- Actas de visitas realizadas los días 4 de Noviembre de 2011 y 26 de marzo y 1 de junio de 2012, con concepto favorable condicionado, visibles a folios 25 al 29 del expediente.

Del anterior material probatorio, observa ésta Dirección que el implicado ha implementado correcciones tendientes al cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, pero es de advertir que el cumplimiento de los mismos no lo exime de la responsabilidad administrativa que ello acarrea, pero le será tenido en cuenta a su favor como atenuante al momento de imponer la sanción.

Por lo es pertinente aclararle al implicado que para desarrollar las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de alimentos se debe cumplir con los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en la Ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, por tanto se debe contar con las condiciones higiénico - locativas, que han sido reglamentadas para este tipo de establecimiento, con el propósito de garantizar la calidad de los alimentos que se distribuyen al público y que están contenidas en el Literal d del artículo 84, artículos 176, 177, 188, 192, 198, 199, 207, 249 literales b y d, 254, 256, 257, 264 y 292 de la Ley 9 de 1979; artículo 8 literal k, artículo 9 literales a, d, f, artículo 13 literal a, artículo 14 literal a del Decreto 3075 de 1997; Numeral 2 del artículo 36, numerales 1.1.1, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.9, 1.1.11.1, 1.1.13 del artículo 26, de conformidad al numeral 5 del artículo 36 y numeral 1 del artículo 42 del Decreto 1500 de 2007 y artículo 77 numeral 3 y artículo 78 numerales 1, 4, 5, 11, 15, 19.1, 20.2 y 26 de la Resolución 2905 de 2007.

Así mismo el Decreto 1500 de 2007 establece que se deben vender productos cárnicos que cumplan con las disposiciones de inocuidad establecidas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, teniendo en cuenta los requisitos de manipulación y conservación los cuales se realizarán bajo condiciones higiénicas y garantizando la conservación de los mismos, ya que los productos que se comercializan en éste establecimiento son considerados de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 3 del Decreto 3075 de 1997.

Los Decretos 3075 de 1997 y 1500 de 2007 han determinado que los distribuidores de cárnicos deben garantizar que el personal manipulador cumpla con las condiciones de estado de salud, capacitación, dotación y prácticas higiénicas para evitar la contaminación del producto y creación de condiciones insalubres.

En cuanto al decomiso de los productos, los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que los alimentos almacenados a temperatura ambiente y con fecha de vencimiento expirada no son comercializables tal como lo establece el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, pues ya no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

En cuanto al cargo imputado por la violación al artículo 34 del Decreto 3075 de 1997, dicho artículo establece que durante las actividades de distribución y comercialización de Alimentos deberá garantizarse el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos, garantía que no cumplían los productos que fueron decomisados el día 1 de septiembre de 2011.

La Ley 9ª de 1979, los Decretos 3075 de 1997 y 1500 de 2007, y las Resoluciones 5109 de 2005 y 2905 de 2007, son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Felipe René Vásquez Menao**, en el establecimiento denominado **La Colmena Carnicería y Legumbrería**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierta en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Para determinar la violación de las citadas normas se acudió a la interpretación armónica, pues cada norma citada hace relación a las condiciones sanitarias que debe cumplir el establecimiento, bien sea para describir el almacenamiento y expendio de alimentos y de acuerdo a ello, se concluye que en el establecimiento objeto del presente proceso sancionatorio, no se garantizaba la calidad de los productos que se tenía para la venta al público.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la **"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y el artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Felipe René Vásquez Henao** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997, además como se dijo anteriormente, haber dado cumplimiento a parte de los requerimientos dejados el día 1 de septiembre de 2011, pues como se puede observar en las visitas posteriores, el concepto del establecimiento sigue siendo "Condicionado", lo que significa que no ha cumplido totalmente.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decorriso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Felipe René Vásquez Henao** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.329.276, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **La Colmena Carnicería y Legumbrería** ubicada en la Calle 20 No. 12 - 09 del municipio de Yarumal

Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTE (20) SALARIOS MINIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

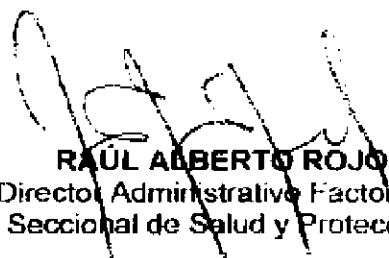
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición y de Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 OCT 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67832
11 OCT 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de febrero de 2012, la Policía Nacional del Municipio de Santa Rosa de Osos, incautó ciento veinte (120) Kilos de carne de res al señor **Joaquín Emilio Sepúlveda Jaramillo** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.462.665, y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad, el día 6 de febrero de 2012, consistente en el decomiso y posterior desnaturalización de la carne por no cumplir con las condiciones sanitarias para su transporte y no presentar guía de procedencia.

Que mediante Auto No. 2110 del 23 de agosto de 2012, se inició la presente investigación y se formuló cargos al señor **Joaquín Emilio Sepúlveda Jaramillo**, en su calidad de **Propietario** de los productos decomisados, por infringir los artículos 278, 279, 304, 305, 341 e Inciso final del Artículo 345 de la Ley 9 de 1979; literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997; Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007 y numeral 29 del artículo 78 de la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.

Que dicho auto fue notificado personalmente al involucrado, espelándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, pero no presentó sus descargos dentro del término de ley, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso.

Es por eso que aplicada la medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso de los ciento veinte (120) kilos de carne de res, se procedió a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio, cumpliendo con los postulados del debido proceso que rige también las actuaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Es de anotar que los productos cárnicos son considerados productos de mayor en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 3 del Decreto 3075 de 1997, es decir que en razón a sus características de composición especialmente en sus contenidos de nutrientes, Aw actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano y por consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso conservación y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor, motivo por el cual se requiere conocer la procedencia de los productos y transportarlos cumpliendo unas condiciones mínimas para su conservación.

En virtud de lo anterior, los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano tales como los que fueron decomisados, que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor y son considerados como no comercializables, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Así mismo, los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y construidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

Se advierte entonces al implicado que la Ley 9ª de 1979, los Decretos 3075 de 1997 y 1500 de 2007, y la Resolución 2905 de 2007, son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 6 de febrero de 2012 constituye infracción a los artículos 278, 279, 304, 305, 341 e inciso final del Artículo 340 de la Ley 9 de 1979; literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997, Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007 y numeral 29 del artículo 78 de la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, por cuanto tener productos que incumplan con las normas de Calidad, pone en riesgo la salud pública que el estado y en este caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas, y quien incurre en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción. Del acervo probatorio relacionado en el auto de inicio y de formulación de cargos No. 2110 del 23 de agosto de 2012, se puede concluir que efectivamente el señor **Joaquín Emilio Sepúlveda Jaramillo**, se infringió la normatividad sanitaria, en lo respectivo al transporte y guía de procedencia de productos para el consumo humano y específicamente en lo relacionado con la conservación, almacenamiento y expendio de los alimentos.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del interés general.*

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

En cuanto al tema de la responsabilidad administrativa, ésta surge de la comisión de un hecho considerado por la Ley como infracción, lo que supone la concurrencia de la culpabilidad y de la antijuricidad en su autor, se dice entonces que es responsable el que está comprometido a asumir determinada conducta o quien debe sufrir las consecuencias del incumplimiento de una obligación determinada.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye al investigado, a título de **culpa grave**, por la

imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Para la graduación de la sanción a imponer, se tendrán en cuenta los criterios contenidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto resultaren aplicables, así como el hecho de que el señor **Joaquín Emilio Sepúlveda Jaramillo** de no ha sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular, por lo que es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de este tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Joaquín Emilio Sepúlveda Jaramillo** identificado con cédula de ciudadanía No. 98 462.665, en su calidad de **Propietario** de los productos decomisados el día 8 de febrero de 2012, con **MULTA** equivalente a **CIENTO VEINTE (120) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al implicado, haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición y de Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67833

11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Autoservicio El Buen Precio** ubicado en la Carrera 11 No. 10 - 65 del municipio de La Unión, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Jhon Jairo Alzate Arcila** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.113.357.

Que mediante Auto No. 72 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1585 del 29 de junio de 2012 se formuló cargos al señor **Jhon Jairo Alzate Arcila**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Autoservicio El Buen Precio**, por infringir los artículos 271, 304, 305 y 306 de la Ley 9ª de 1979, Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 y numeral 5.8 del artículo 5 de la Resolución 5109 de 2005.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se aplican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos los que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, tales como los que incumplen con los requisitos de registro sanitario, que son catalogados como no comercializables, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

El artículo 306 de la Ley 9 de 1979 y el artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 establece que todo alimento que se expendi directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario debidamente expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y Resolución 5109 de 2005, son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Jhon Jairo Alzate Arcila**, en el establecimiento denominado **Autoservicio El Buen Precio**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del interés general.*”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 70 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Jhon Jairo Alzate Arcila** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Jhon Jairo Alzate Arcila** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.113.357, en su calidad de **Propietario** del establecimiento **Autoservicio El Buen Precio** ubicado en la Carrera 11 No. 10 - 65 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTICINCO (25) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El

comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales para el respectivo cobro coactivo.

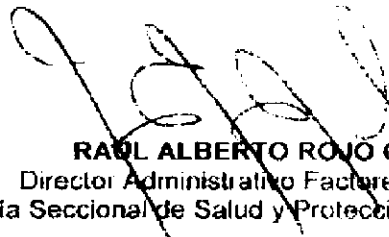
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los imputados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 67834

11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 18 de agosto de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Cafetería y Restaurante El**

Encuentro Social ubicada en la Carrera 50 No. 50 - 40 del municipio de Guarne, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Luz Dary Arcila Rámirez** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.795.504 y su **Administrador** el señor **Luis Albeiro Echeverri Castro** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.557.660.

Que mediante Auto No. 675 del 13 de abril de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1958 del 8 de agosto de 2012 se formuló cargos a la señora **Luz Dary Arcila Rámirez** y al señor **Luis Albeiro Echeverri Castro**, en sus calidades de **Propietaria y Administrador**, respectivamente de la **Cafetería y Restaurante El Encuentro Social**, por infringir los artículos 199, 207, 251, 254, 255, 256, 258, 259, 263, 289 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979 y artículo 8 literales d, e y q, 9 literal d, 10, 11 literal i, 13 literal a, 14 literal a, 20 literal a y 31 literales b, c y g del Decreto 3075 de 1997.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos a los implicados, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fueron notificados por edicto, no presentaron sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 18 de agosto de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Como se anotó anteriormente, en visita realizada los días 18 de agosto de 2011 al establecimiento **Cafetería y Restaurante El Encuentro Social**, por el incumplimiento a los requisitos higiénico locativos en el establecimiento, se aplicó la suspensión del servicio de piscina para prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación que pudiera atentar contra la salud de la comunidad, medida que fue levantada una vez se comprobó el cumplimiento de los requerimientos.

Por lo anterior es pertinente aclararle al implicado que para desarrollar las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de alimentos se debe cumplir con los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en la Ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, por tanto se debe contar con las condiciones higiénico - locativas, que han sido reglamentadas para este tipo de establecimiento, con el propósito de garantizar la calidad de los alimentos que se distribuyen al público y que están contenidas en los artículos 199, 207, 251, 254, 255, 256, 259, 263 y 289 de la Ley 9ª de 1979 y artículo 8 literales d, e y q, 9 literal d, 10, 11 literal i, 13 literal a, 14 literal a, 20 literal a y 31 literales b, c y g del Decreto 3075 de 1997;

Igualmente, el Decreto 3075 de 1997 ha determinado que todas las personas que realicen actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.

Por otra parte el artículo 31 en su literales b, c y g del Decreto 3075 de 1997, establece que el almacenamiento de productos que requieren refrigeración se realizará teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que requiera cada alimento, se realizara de manera que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan afectar la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. Estas instalaciones se mantendrán limpias y en buenas condiciones higiénicas, y alejados de los productos de aseo. En cuanto al aceite decomisado, el artículo 258 de la Ley 9 de 1979 establece que no se permite reutilizar alimentos, bebidas, sobrantes de salmuera, jugos, salsas y aceites.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos los que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, tales como los que incumplen con condiciones sanitarias de almacenamiento, que son catalogados como no comercializables, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor Luz Dary Arcila Rámirez, en el establecimiento denominado Cafetería y Restaurante El Encuentro Social, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del Interés general.*"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

El Artículo 91 del Decreto 3075 de 1997 establece que de la aplicación de una medida sanitaria de seguridad se iniciará inmediatamente el respectivo procedimiento sancionatorio que debe cumplir con los postulados del debido proceso pues éste rige también las actuaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 de la Constitución Política, tal como se cumplió en el caso particular.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

En cuanto a la responsabilidad de los implicados, el Decreto 3075 de 1997 determinó que la salud es un bien de interés público, en consecuencia, las disposiciones contenidas en el son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, por tanto claramente el artículo 40 del citado Decreto, determinó que los propietarios y los administradores de los establecimientos que comercializan alimentos son responsable de la higiene, conservación y protección de los mismos.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas, y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Luz Dary Arcila Ramírez** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.795.504, en su calidad de

Propietaria de la Cafetería y Restaurante El Encuentro Social ubicada en la Carrera 50 No. 50 - 40 del municipio de Guarne, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor **Luis Albeiro Echeverri Castro** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.557.660 en su calidad de **Administrador de la Cafetería y Restaurante El Encuentro Social** con **AMONESTACIÓN**, y se le conmina a dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67835
11 DIC 2012
Por medio de la cual se impone una sanción
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 1 de noviembre de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Mercatodo Donde Hugo D.A.P.** ubicado en la Carrera 10 No. 10 - 30 del municipio de Briceño, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Danilo Andrés Palacio Vásquez** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.411.619.

Que mediante Auto No. 2322 del 14 de septiembre 2012, se inició la presente investigación y se le formuló cargos al señor **Danilo Andrés Palacio Vásquez**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Mercatodo Donde Hugo D.A.P.**, por infringir los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979; Artículo 34 del Decreto 3075 de 1997 y la definición de "FECHA LIMITE DE UTILIZACIÓN" contenida en el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, quien no presentó los descargos dentro del término de ley, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Es por ello que aplicada la medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso de los productos que se describen a continuación, se procedió a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio, cumpliendo con los postulados del debido proceso que rige también las actuaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Producto	Presentación	Cantidad	Motivo
Roskotas	Bolsa x 14gr	5	Fecha de vencimiento expirada
Golosa	S.D.	17	Fecha de vencimiento expirada
Ponqué Lolita	Tajada x 60gr	15	Fecha de vencimiento expirada

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que si los alimentos con fecha de vencimiento expirada no son comercializables tal como lo establece el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, pues ya no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Así mismo, el artículo 34 del Decreto 3075 de 1997, establece que durante las actividades de distribución y comercialización de Alimentos y materias primas deberá garantizarse el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos, pues lo que se busca es la protección de la salud pública en todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 5109 de 2005 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor Danilo Andrés Palacio Vásquez, en el establecimiento denominado **Mercatodo Donde Hugo D.A.P.**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 4º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 1 de noviembre de 2011 constituye infracción a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979; Artículo 34 del Decreto 3075 de 1997 y la definición de "FECHA LIMITE DE UTILIZACION" contenida en el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005, por cuanto tener productos que

incumplan con las normas de Calidad, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

En cuanto al tema de la responsabilidad administrativa, ésta surge de la comisión de un hecho considerado por la Ley como infracción, lo que supone la concurrencia de la culpabilidad y de la antijuricidad en su autor, se dice entonces que es responsable el que está comprometido a asumir determinada conducta o quien debe sufrir las consecuencias del incumplimiento de una obligación determinada.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye al investigado, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Para la graduación de la sanción a imponer, se tendrán en cuenta los criterios contenidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto resultaren aplicables, así como el hecho de que el señor **Daniilo Andrés Palacio Vásquez** de no ha sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular, por lo que es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que los un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Daniilo Andrés Palacio Vásquez** identificado con cédula de ciudadanía No. 71411619, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Mercatodo Donde Hugo D.A.P.** ubicado en la Carrera 10 No. 10 - 30 del municipio de Briceño, Antioquia, con **AMONESTACIÓN**, y se le condena a dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al implicado haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución nge a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67836
11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia

Que el día 24 de febrero de 2012, la Policía Nacional del Municipio de Montebello, incautó treinta (30) Kilos de carne de res al señor **Guillermo León López López** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.140.920, y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad, consistente en el decomiso y posterior desnaturalización de la carne por no cumplir con las condiciones sanitarias para su transporte y no presentar guía de procedencia

Que mediante Auto No. 2111 del 23 de agosto de 2012, se inició la presente investigación y se formuló cargos al señor **Guillermo León López López**, en su calidad de **Propietario** de los productos decomisados, por infringir los artículos 278, 279, 304, 305, 341 e Inciso final del Artículo 345 de la Ley 9 de 1979; literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997; Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007 y numeral 29 del artículo 78 de la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.

Que dicho auto fue notificado personalmente al involucrado, espetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, pero no presentó sus descargos dentro de término de ley, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso.

Es por eso que aplicada la medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso de los ciento veinte (120) kilos de carne de res, se procedió a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio, cumpliendo con los postulados del debido proceso que rega también las actuaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Es de anotar que los productos cárnicos son considerados productos de mayor en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 3 del Decreto 3075 de 1997, es decir que en razón a sus características de composición especialmente en sus contenidos de nutrientes, Aw actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano y por consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso conservación y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor, motivo por el cual se requiere conocer la procedencia de los productos y transportarlos cumpliendo unas condiciones mínimas para su conservación.

En virtud de lo anterior, los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano, tales como los que fueron decomisados, que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor y son considerados como no comercializables, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Así mismo, los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y construidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

Se advierte entonces al implicado que la Ley 9ª de 1979, los Decretos 3075 de 1997 y 1500 de 2007, y la Resolución 2905 de 2007, son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 24 de febrero de 2012 constituye infracción a los artículos 278, 279, 304, 305, 341 e Inciso final del Artículo 345 de la Ley 9 de 1979; literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997, Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007 y numeral 29 del artículo 78 de la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, por cuanto tener productos que incumplan con las normas de Calidad, pone en riesgo la salud pública que el estado y en este caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas, y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Del acervo probatorio relacionado en el auto de inicio y de formulación de cargos No. 2111 del 23 de agosto de 2012, se puede concluir que efectivamente el señor Guillermo León López López, se infringió la normatividad sanitaria, en lo respectivo al transporte y guía de procedencia de productos para el consumo humano y específicamente en lo relacionado con la conservación, almacenamiento y expendio de los alimentos.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene

límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la **"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general."**

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

En cuanto al tema de la responsabilidad administrativa, ésta surge de la comisión de un hecho considerado por la Ley como infracción, lo que supone la concurrencia de la culpabilidad y de la antijuricidad en su autor, se dice entonces que es responsable el que está comprometido a asumir determinada conducta o quien debe sufrir las consecuencias del incumplimiento de una obligación determinada.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye al investigado, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Para la graduación de la sanción a imponer, se tendrán en cuenta los criterios contenidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto resultaren aplicables, así como el hecho de que el señor **Guillermo León López López** de no ha sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular, por lo que es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Guillermo León López López** (identificado con cédula de ciudadanía No. 71 140.920, en su calidad de **Propietario** de los productos

decomisados el día 24 de febrero de 2012, con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del **Banco Popular No. 18072008-8** o en la cuenta de Ahorros del **Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

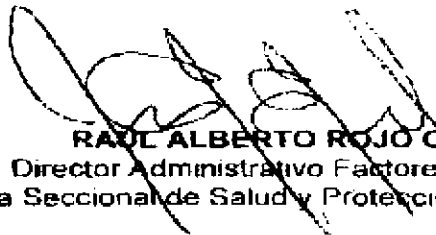
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al implicado haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67837

11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

C O N S I D E R A N D O:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 9 de agosto de 2011, la Policía Nacional del municipio Carepa realizó una incautación de licor al señor **Germán Alfonso Barreto Jiménez** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.017.861, y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad consistente en la congelación del licor, pues presentaban inconsistencias en el licor, la tapa y la etiqueta.

Que se procedió a enviar muestra de licor al laboratorio de la Fábrica de Licores de Antioquia para que analizara su procedencia, entidad que el día 14 de septiembre de 2011 mediante oficio radicado No. 201100047380, previo análisis al contenido y al material de empaque, concluyó que las muestras de licor corresponden con productos **Fraudulentos** pues NO cumplían los requisitos del producto FLA, de acuerdo a dicho resultado se aplicó medida sanitaria consistente en la desnaturalización de los productos.

Que mediante Auto No. 1499 del 20 de junio de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 2105 del 23 de agosto de 2012 se formuló cargos al señor **Germán Alfonso Barreto Jiménez**, en calidad de **Propietario** de los **productos decomisados**, por infringir los artículos 304, 305, 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979 y literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 9 de agosto de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos los que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

La conducta objeto de aplicación de decomiso el día 9 de agosto de 2011 es una infracción a los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979, el artículo 2 numerales 6 literal a del Decreto 3192 de 1983, por cuanto presenta la apariencia y características generales de los licores oficialmente aprobados y que no proceden directamente de la Fábrica de Licores de Antioquia, como quedó demostrado en el análisis realizado por la citada empresa.

La responsabilidad desplegada el día de los hechos, se encuentra enmarcada dentro de las normas de autenticidad y de las bebidas alcohólicas,

específicamente sobre requisitos físico químicos, grado alcohólico, color, características organolépticas y empaque por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3192 de 1983 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Germán Alfonso Barreto Jiménez**, en el establecimiento denominado productos decomisados, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del interés general.*"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

El Artículo 91 del Decreto 3075 de 1997 establece que de la aplicación de una medida sanitaria de seguridad se iniciará inmediatamente el respectivo procedimiento sancionatorio que debe cumplir con los postulados del debido proceso pues esto rige también las actuaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 de la Constitución Política, tal como se cumplió en el caso particular.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Del acervo probatorio se puede concluir que en el establecimiento denominado productos decomisados cuyo propietario y/o representante legal es el señor Germán Alfonso Barreto Jiménez, se infringieron la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, en lo respectivo a la comercialización de productos para el consumo humano y específicamente en lo relacionado con la conservación, almacenamiento y expendio de los alimentos.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factores atenuantes para la señora **Germán Alfonso Barreto Jiménez**, los buenos antecedentes y la ignorancia invencible según lo contemplado en el artículo 182 del Decreto 3192 de 1983.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 124 del Decreto 3192 de 1983, son las siguientes.

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10 000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, **sin importar la cantidad que sea**, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Germán Alfonso Barreto Jiménez** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.017.861, en su calidad de Propietario de los **productos decomisados**, con **MULTA** equivalente a **QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la

cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición y de Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse debidamente** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67839

11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 2 de marzo de 2011, funcionarios adscritos a esta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Carnicería San Antonio** ubicada en la Plaza de Mercado del municipio de Tarazá, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Juan M. Montoya** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.036.875.

Que mediante Auto No. 661 del 12 de abril de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 824 del 4 de mayo de 2012 se formuló cargos al señor **Juan M. Montoya**, en su calidad de **Propietario** de la **Carnicería San Antonio**, por infringir los artículos 304, 305 y 345 Ley 9 de 1979; literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997; Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007 y numeral 29 del artículo 78 de la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 2 de marzo de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Respecto al producto decomisado, hay que aclarar que es un producto considerado de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 3° del Decreto 3075 de 1997 por lo que requiere conocer la procedencia del producto destinado para la venta al público para proteger la salud de los consumidores, en tal sentido quien se dedica a la actividad de producción y/o expendio de alimentos debe cumplir con tales requisitos.

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 2 de marzo de 2011 es una infracción al inciso final del artículo 345 de la Ley 9ª de 1979, al artículo 31 literal c del Decreto 3075 de 1997 y numeral 2 del artículo 39 del Decreto 1500 de 2007, por lo que al comprobar su violación, se procedió al decomiso de los productos que constituyen la evidencia física de la conducta infractora, que por demás se encuentra tipificada en el artículo 305 de la Ley 9ª de 1979, cuando establece la prohibición de la tenencia y expendio de productos no aptos para el consumo humano.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Juan M. Montoya**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, verificando que la carne cuente con su respectiva guía de procedencia.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del interés general.*”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante el señor **Juan M. Montoya** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Juan M. Montoya** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.036.875, en su calidad de **Propietario** de la **Carnicería San Antonio** ubicada en la Plaza de Mercado del municipio de Tarazá, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **TRECE (13) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la **cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los **11 de Dic 2012**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67840 11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 2 de agosto de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al **Expendio de Carnes La Principal** ubicado en la Calle 30 No. 29 - 29 del municipio de Marinilla, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Maria Margarita Lozano Acosta** identificada con cédula de ciudadanía No. 1018410908, y su **Administrador** el señor **Alberto Giraldo Jiménez** identificado con cédula de ciudadanía No. 70904804.

Que mediante Auto No. 804 del 2 de mayo de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1957 del 8 de agosto de 2012 se formuló cargos a la señora **Maria Margarita Lozano Acosta** y al señor **Alberto Giraldo Jiménez**, en sus calidades de **Propietaria y Administrador**, respectivamente del establecimiento denominado **Expendio de Carnes La Principal**, por infringir los artículos 289, 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979; Artículo 31 literal d del Decreto 3075 de 1997 y artículo 78 numeral 31 Resolución 2905 de 2007.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentaron los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 2 de agosto de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Respecto a los productos cárnicos decomisados, hay que aclarar que es un producto considerado de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 3º del Decreto 3075 de 1997 por lo que se requiere almacenarla cumpliendo unas condiciones mínimas para proteger la salud de los consumidores.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos los que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, tales como los que incumplen con las condiciones de almacenamiento, que son catalogados como no comercializables, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Por otra parte el literal c del artículo 31 del Decreto 3075 de 1997, establece que el almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizará de manera que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan afectar la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos.

Frente lo anterior manifiestan los implicados en sus descargos que el administrador se encontraba incapacitado por lo que se vieron en la necesidad de contratar a una persona para que lo reemplazara, ésta persona no estaba autorizada para recibir en almacenamiento alimentos, quien aparentemente decidió hacerle un favor a una persona ajena al negocio y le guardó los tarros de helado. Ninguno de lo productos se encontraban en estado de descomposición, no eran comercializados por el establecimiento y que los productos cárnicos no fueron mas de diez (10) libras.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que se realiza en el establecimiento denominado **Expendio de Carnes La Principal**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Es por eso que como distribuidores de alimentos, deben tener como objetivo el cuidado y la conservación de los mismos, conservándolos con las especificaciones técnicas, para lo cual deben garantizar el mantenimiento de las condiciones ambientales de almacenamiento de productos, teniendo en cuenta algunas características relacionadas con la luz, la temperatura, humedad y combustibilidad.

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad en el almacenamiento, **sin importar la cantidad que sea**, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

En cuanto al tema de la responsabilidad administrativa, ésta surge de la comisión de un hecho considerado por la Ley como infracción, lo que supone la concurrencia de la culpabilidad y de la antijuricidad en su autor, se dice entonces que es responsable el que esta comprometido a asumir determinada conducta o quien debe sufrir las consecuencias del incumplimiento de una obligación determinada.

Es entonces como en el ámbito del derecho sancionador se ha atribuido la responsabilidad a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido del presunto infractor frente a los cargos que se le imputan, pero en el *sub judice* es importante advertir que por no encontrarse el señor **Alberto Giraldo Jiménez** incapacitado el día de los hechos, no está llamado a sufrir las consecuencias del incumplimiento de una obligación determinada.

Por otro lado hubo negligencia de la señora **María Margarita Lozano Acosta** en los hechos constitutivos de infracción a la normatividad sanitaria vigente, al permitir que en su establecimiento se almacenaran productos cárnicos sin cumplir con las condiciones sanitarias, toda vez que como **Propietaria** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

No obstante al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para la señora **Maria Margarita Lozano Acosta** el hecho de que el helado no era de su propiedad, así como el hecho de no haber sido sancionada antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 368, el nuestro es un país que se fundamenta en la *prevalencia del interés general.*"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de Responsabilidad administrativa al señor **Alberto Giraldo Jiménez** identificado con cédula de ciudadanía No. 70904804, en

calidad de **Administrador del Expendio de Carnes La Principal** ubicada en la Calle 30 No. 29 - 29 del municipio de Marinilla Antioquia, por las consideraciones antes expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la señora **María Margarita Lozano Acosta** identificada con cédula de ciudadanía No. 1018410908, en su calidad de **Propietaria del Expendio de Carnes La Principal** ubicado en la Calle 30 No. 29 - 29 del municipio de Marinilla, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

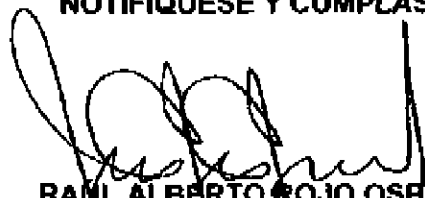
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSFINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67841

11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por

el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 12 de octubre de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Panadería Cafetería El Jazmín** ubicado en la Transversal 8 No. 16 - 08 del municipio de El Peñol, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Hernán Dario Alzate Meneses** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.577.835.

Que mediante Auto No. 801 del 2 de mayo de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1614 del 4 de julio de 2012 se formuló cargos al señor **Hernán Dario Alzate Meneses**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Panadería Cafetería El Jazmín**, por infringir los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979; artículo 8 literales d, 9 literal c, 17 literal a, 31 literal a y 34 del Decreto 3075 de 1997 y la definición de "FECHA LIMITE DE UTILIZACION" contenida en el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que mediante auto No. 2000 del 13 de agosto de 2012, se decretó como prueba realizar una visita a la **Panadería Cafetería El Jazmín** para que verificar si se cumplió con los requerimientos dejados en la visita realizada el día 12 de octubre de 2011.

Que el día 31 de agosto de 2012, la Técnica del Área de la Salud del Municipio de El Peñol realizó visita al citado establecimiento, evidenciando que el establecimiento cambió de propietario.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Frente a las infracciones evidenciadas el día de la visita manifiesta el implicado en sus descargos que los productos vencidos los tenía separados en el refrigerador porque el proveedor le había informado que los iba a cambiar, por eso no estaban para la venta, así mismo atribuye negligencia en la Técnica Área de la Salud que realizó la visita porque era "boto (sic)" los productos y procedió a "demandarlo" ante este despacho.

En cuanto a las irregularidades higiénico locativas afirma que lleva once (12) meses en el local, el cual no había sido visitado por ningún funcionario y no le había dado recomendaciones, por lo tanto no cree que haya infringido la ley, por lo que solicitó nueva visita y que se le inicie proceso a las empresas productoras ya que deben tener mejor calidad de los productos que venden.

Se le advierte al implicado que los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que los alimentos con fecha de vencimiento expirada no son comercializables tal como lo establece el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano, precisamente por esa razón fueron sujetos de aplicación de la medida sanitaria consistente en decomiso y posterior desnaturalización, que se hizo sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar como lo permite el artículo 60 del Decreto 3075 de 1997.

Precisamente como lo ordena el artículo 94 del Decreto 3075 de 1997, que aplicada la medida sanitaria de seguridad, se procedió a iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio y no es una demanda presentada por la Técnica Área de la Salud que realizó la visita.

Por otra parte el artículo 34 del Decreto 3075 de 1997, establece que durante las actividades de distribución y comercialización de Alimentos deberá garantizarse el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos, garantía que no cumplieron los productos que fueron decomisados el día 12 de octubre de 2011.

Así mismo es pertinente aclararle al implicado que para desarrollar las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de alimentos se debe cumplir con los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en la Ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, por tanto se debe contar con las condiciones higiénico - locativas, que han sido reglamentadas para este tipo de establecimiento con el propósito de garantizar la calidad de los alimentos que se distribuyen al público y que están contenidas en los artículos 8 literales d, 9 literal c, 17 literal o y 31 literal a del Decreto 3075 de 1997.

Respecto al cumplimiento de los requerimientos dejados al día de la visita, no se pudo constatar el cumplimiento por parte del implicado, pues a la fecha de la visita ordenada como prueba, el establecimiento había cambiado de propietario.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Hernán Dario Alzate Meneses**, en el establecimiento denominado **Panadería Cafetería El Jazmín**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento vigente, por lo que no le es dado que atribuya la responsabilidad a los proveedores.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por

expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del interés general.*"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Hernán Dario Alzate Meneses** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10 000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad, sin importar la cantidad que sea, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietario** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de este tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Hernán Darío Alzate Meneses** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.577.835, en su calidad de **Propietario de la Panadería Cafetería El Jazmín** ubicada en la Transversal 6 No. 16 - 08 del municipio de El Peñol, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

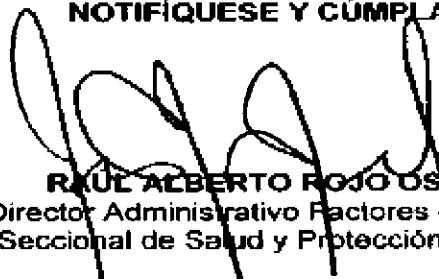
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición y de Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 DIC 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67842 11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 18 de agosto de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Carnicería La Fortuna** ubicada en La Avenida del municipio de Tarazá Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Jhon Fredy Cartagena Prado** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.810.998 y su **Administrador** el señor **Rafael Orlando Sánchez Miranda** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.668.332.

Que mediante Auto No. 672 del 12 de abril de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. del se formuló cargos a los señores **Jhon Fredy Cartagena Prado** y **Rafael Orlando Sánchez Miranda** en sus calidades de **Propietario y Administrador**, del establecimiento denominado **Carnicería La Fortuna**, por infringir los artículos 304, 305 y 307 de la Ley 9ª de 1979 y artículos 6 y 10 numeral 1 del Decreto 1500 de 2007.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, no presentaron sus descargos dentro del término de ley.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a los señores **Jhon Fredy Cartagena Prado** y **Rafael Orlando Sánchez Miranda**, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, no presentaron sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 18 de agosto de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 8 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Respecto al producto decomisado, hay que aclarar que es un producto considerado de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 3º del Decreto 3075 de 1997 por lo que requiere conocer la procedencia del producto destinado para la venta al público para proteger la salud de los consumidores, en tal sentido quien se dedica a la actividad de producción y/o expendio de alimentos debe cumplir con tales requisitos.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expendir productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos los que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que la carne que no cumple con las condiciones sanitarias no es comercializable, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 18 de agosto de 2011 en una infracción al inciso final del artículo 345 de la Ley 9ª de 1979 al artículo 31 literal c del Decreto 3075 de 1997 y artículos 6 y 10 numeral 1 del Decreto 1500 de 2007, por lo que al comprobar su violación, se procedió al decomiso de los productos que constituyen la evidencia física de la conducta infractora.

La Ley 9ª de 1979 y los Decretos 3075 de 1997 y 1500 de 2007 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que se realiza en el establecimiento denominado Carnicería La Fortuna, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expedieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del interés general.*

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

En cuanto a la responsabilidad de los implicados, el Decreto 3075 de 1997 determinó que la salud es un bien de interés público, en consecuencia, las disposiciones contenidas en el son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, por tanto claramente el artículo 40 del citado Decreto, determinó que los propietarios y los administradores de los establecimientos que comercializan alimentos son responsable de la higiene, conservación y protección de los mismos.

Es por eso que la responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye a los investigados, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Jhon Fredy Cartagena Prado** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad, sin importar la cantidad que sea, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a los señores Jhon Fredy Cartagena Prado identificada con cédula de ciudadanía No. 11.810.998 y Rafael Orlando Sánchez Miranda identificado con cédula de ciudadanía No. 15.668.332, en sus calidades de Propietario y Administrador, respectivamente del establecimiento denominado Carnicería La Fortuna ubicada en La Avenida del municipio de Tarazá, Antioquia, con **MULTAS** equivalentes a **TRESCIENTOS CINCUENTA (350) Y CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** respectivamente, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición y de Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los **05** de **OCTUBRE**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67843
11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 2 de marzo de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Carnicería Quiroz** ubicada en el Barrio Eduardo Correa del municipio de Tarazá, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Dumar de Jesús Quiroz Suárez** identificado con cédula de ciudadanía No. 70.542.520.

Que el día 16 de agosto de 2011, se realizó inspección al **vehículo transportador de Alimentos** de propiedad del citado señor, por las infracciones a la normatividad sanitaria vigente evidenciadas, se dio concepto desfavorable definitivo para el vehículo, por no ser apto para el transporte de carne.

Que mediante Auto No. 688 del 13 de abril de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1024 del 15 de mayo de 2012 se formuló cargos al señor **Dumar de Jesús Quiroz Suárez**, en su calidad de **Propietario**, del establecimiento denominado **Carnicería Quiroz y vehículo transportador de carne**, por infringir los artículos 278, 279, 304, 305, 307 y 341 de la Ley 9 de 1979 y artículos 6 y 10 numeral 1 del Decreto 1500 de 2007.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, no presentó sus descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 2 de marzo y 16 de agosto de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 575 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos los que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, tales como los que incumplen con los requisitos de registro sanitario, etiqueta y rotulo que son catalogados como no comercializables tal como lo establece el artículo 3 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Respecto a la carne decomisada, hay que aclarar que es un producto considerado de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 31 del Decreto 3075 de 1997 por lo que se requiere conocer la procedencia del producto destinado para la venta al público para proteger la salud de los consumidores, además transportarla cumpliendo unas condiciones mínimas para proteger la salud de los consumidores, en tal sentido quien se dedica a la actividad de transporte de alimentos debe cumplir con tales condiciones.

Es así entonces como los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y contruidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor Dumar de Jesús Quiroz Suárez, en el establecimiento denominado **Carnicería Quiroz** y en el vehículo transportador de carne, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, y revisando que la carne cuente con su respectiva guía de procedencia.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la **"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de culpa grave de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Dumar de Jesús Quiroz Suárez** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad, sin importar la cantidad que sea, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Dumar de Jesús Quiroz Suárez** identificado con cédula de ciudadanía No. 70.542.520, en su calidad de **Propietario** de la Carnicería **Quiroz** ubicada en el Barrio Eduardo Correa del municipio de Tarazá, Antioquia y del vehículo transportador de carne, con **MULTA** equivalentes a **CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición y de Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

11 de Dic. 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

RESOLUCIÓN N° 67849 11 DIC 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 2 de marzo de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Carnicería Rey** ubicada en el Barrio María Garol Calle 31 Esquina del municipio de Tarazá, Antioquia, cuyo **Propietario** es el señor **Reinaldo de Jesús Higueta Arias** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.946.666.

Que mediante Auto No. 650 del 12 de abril de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 1781 del 19 de julio de 2012 se formuló cargos al señor **Reinaldo de Jesús Higuita Arias**, en su calidad de **Propietario** del establecimiento denominado **Carnicería Rey**, por infringir los artículos 304, 305 y 345 Ley 9 de 1979; literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997; Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007 y numeral 29 del artículo 78 de la Resolución 2805 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 2 de marzo de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección

Respecto al producto decomisado, hay que aclarar que es un producto considerado de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 37 del Decreto 3075 de 1997 por lo que requiere conocer la procedencia del producto destinado para la venta al público para proteger la salud de los consumidores. en tal sentido quien se dedica a la actividad de producción y/o expendio de alimentos debe cumplir con tales requisitos.

Los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos los que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, como los productos cárnicos a los cuales se les desconoce la procedencia, pues no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Es por eso que la conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 2 de marzo de 2011 constituye infracción al inciso final del artículo 345 de la Ley 9ª de 1979, al artículo 31 literal c del Decreto 3075 de 1997 y numeral 2 del artículo 39 del Decreto 1500 de 2007.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 1500 de 2007, son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Reinaldo de Jesús Higuita Arias**, en el establecimiento denominado **Carnicería Rey**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que la carne oriende con su respectiva guía de procedencia.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de uso mandato que se expidieron entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del interés general.*"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Reinaldo de Jesús Higuita Arias** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento.*

Tener productos que incumplan con las normas de Calidad, sin importar la cantidad que sea, pone en riesgo la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Reinaldo de Jesús Higuita Arias** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.946.666, en su calidad de **Propietario de la Carnicería Rey** ubicada en la Barrio María Garol Calle 31 Esquina del municipio de Tarazá, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES**, valor vigente en el momento de dictarse la presente resolución y que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición y de Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, norma vigente para el presente proceso de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

21 DIC. 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL ALBERTO ROJAS OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Comité Calificador, Resolución No. 7807 del 05 de octubre de 2004

Secretaría de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional

AVISA

Que el 20 de Noviembre de 2012, falleció el señor **JUAN GUILLERMO TOBÓN BERNAL**, identificado en vida con la cédula 8.224.048, se ha presentado a reclamar la sustitución de la pensión, la señora **OLGA DE JESÚS BOHORQUEZ GÓMEZ**, identificada con la cédula 32.416.183, como cónyuge de la causante.

Otras personas que se consideren con derecho en el negocio que se tramita, deben presentarse a hacerlo valer a esta Dirección, en el término de treinta (30) días.

Medellín, 5 de diciembre de 2012


GLORIA LILIANA ARISTIZABAL C.
Auxiliar de Prestaciones Sociales

2-2

Pedido. 4300011484

Secretaría de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional**AVISA**

Que el día 21 de noviembre de 2012, falleció el (la) señor (a) **JOEL EMIRO GARCÉS MOSQUERA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **6.568.599**, se ha presentado a reclamar la pensión de sobrevivientes el (la) señor (a) **CRUZ ELENA PALACIO ARANGO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **32.491.887**, en calidad de compañera permanente.

Otras personas que se consideren con derecho en el negocio que se tramita, deben presentarse a hacerlo valer a la Dirección de Prestaciones Sociales y Nomina del Departamento, en el término de treinta días.

Medellín, 11 de diciembre de 2012

Pedido. 4300011484


JUAN CARLOS CADAVID LOAIZA
Auxiliar Administrativo

2 - 2

Secretaría de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional**AVISA**

Que el día 11 de noviembre de 2008, falleció el (la) señor (a) **RAMIRO DE JESÚS RESTREPO ZAPATA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **501.797**, se ha presentado a reclamar la pensión de sobrevivientes el (la) señor (a) **CLODOMIRO RESTREPO CARDONA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **98.464.693**, en calidad de hijo discapacitado.

Otras personas que se consideren con derecho en el negocio que se tramita, deben presentarse a hacerlo valer a la Dirección de Prestaciones Sociales y Nomina del Departamento, en el término de treinta días.

Medellín, 12 de diciembre de 2012

Pedido. 4300011484


JUAN CARLOS CADAVID LOAIZA
Auxiliar Administrativo

2 - 2

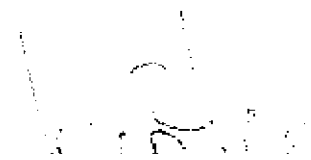
Secretaría de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional**AVISA**

Que el día 15 de diciembre de 2009, falleció el (la) señor (a) **ROSA MARÍA MAYA MEJÍA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **21.271.737**, se ha presentado a reclamar la pensión de sobrevivientes el (la) señor (a) **LUCIA MAYA MEJÍA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **21.298.339**, en calidad de hermana discapacitada.

Otras personas que se consideren con derecho en el negocio que se tramita, deben presentarse a hacerlo valer a la Dirección de Prestaciones Sociales y Nomina del Departamento, en el término de treinta días.

Medellín, 18 de diciembre de 2012

Pedido. 4300011484


JUAN CARLOS CADAVID LOAIZA
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo

2 - 2